

XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires, 2009.

Políticas públicas para los jóvenes en Sudamérica.

Verónica Filardo, Gabriel Chouhy. y Laura Noboa.

Cita:

Verónica Filardo, Gabriel Chouhy. y Laura Noboa. (2009). *Políticas públicas para los jóvenes en Sudamérica. XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. VIII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-062/1878>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Políticas públicas para los jóvenes en Sudamérica

Verónica Filardo, Gabriel Chouhy, Laura Noboa

Investigadores del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.

veronica@fcs.edu.uy; gchouhy@fcs.edu.uy, lauranoboa@gmail.com

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LOS JÓVENES en SUDAMERICA¹

Verónica Filardo, Gabriel Chouhy y Laura Noboa

Se analizan las respuestas de los ciudadanos de los 6 países del cono sur de América Latina (Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay), focalizando en las opiniones respecto a las políticas públicas que los distintos gobiernos impulsan para mejorar la calidad de vida de los jóvenes.

El análisis aborda tres importantes asuntos. En primer lugar, se presentan las evaluaciones ciudadanas en relación a cuán activos son los gobiernos a la hora de promover acciones y programas focalizados en la juventud o las juventudes. Seguidamente, se muestran las prioridades que los habitantes de los distintos países considerados asignan a las distintas áreas sectoriales en que pueden dividirse los programas. Finalmente, se informa respecto al grado de conocimiento que actualmente existe en los distintos países sobre las acciones concretas que hoy en día desarrollan los gobiernos. El análisis se realiza privilegiando las diferencias y coincidencias entre los países. Adicionalmente, se tendrá en cuenta asociación de las respuestas con algunas variables de estratificación social, tales como el sexo, el nivel educativo, el sector (rural o urbano), el ingreso y –muy especialmente– la edad.

1. Evaluación de los gobiernos en materia de políticas públicas para los jóvenes

La encuesta plantea una escala que gradúa tres opiniones: 1. “el gobierno no conoce ni se preocupa por las necesidades de los jóvenes. 2. “el gobierno conoce las necesidades de los/las jóvenes pero no hace nada” y 3. “el gobierno apoya y promueve programas y acciones dirigidas a la juventud”.

Considerando las respuestas por país se encuentra que la primera, francamente negativa, recoge entre el 8% y el 17% de las adhesiones. Situándose en el máximo Bolivia y en el mínimo Uruguay.

La segunda opción -que supone una percepción de déficit en la atención (implementación de medidas, programas o acciones) pero no en la identificación de las necesidades de los jóvenes por parte de los gobiernos- concentra a más del 45 % de los ciudadanos de todos los países, señalando disconformidad. Se presentan, no obstante diferencias sustantivas por país en este aspecto. Paraguay recoge el 80% de las opiniones, y Uruguay un 45%.

En el otro extremo, que refleja la aprobación por parte de los encuestados de las acciones del gobierno de cada país referentes a políticas para jóvenes, se encuentran entre el 7% y el 43%, marcándose nuevamente diferencias entre los países, que sitúan como extremos a Paraguay y a Uruguay.

Considerando la distribución de las opiniones en base a esta escala, es posible identificar tres grupos de países: por un lado se encuentra Uruguay como el país mejor evaluado (estrictamente en términos de políticas públicas dirigidas a jóvenes), con un nivel de conformidad que alcanza casi a la mitad de la

¹ Esta ponencia deriva de la investigación realizada en el proyecto “Juventudes sudamericanas: Desafíos para la democracia regional” por una red de investigación americana con la coordinación de IBASE- POLIS (Brasil) integrada por CIDPA (Chile), PIEB (Bolivia); Fundación SES (Argentina); BaseIS (Paraguay); y Cotidiano Mujer- GEUG- DS- FCS- Udelar (Uruguay).

población de ese país. En segundo lugar se encuentra el grupo integrado por Chile, Bolivia y Brasil, que cuentan con una opinión favorable en este aspecto en el entorno del 20% de los ciudadanos. El tercer grupo se caracteriza por una evaluación ciudadana francamente negativa de los gobiernos en cuando al conocimiento y acción sobre las necesidades de los jóvenes, y se integra por Argentina y Paraguay (que no superan el 9 % de opiniones favorables).

Los resultados señalan la percepción ciudadana de un claro déficit de atención y/o de implementación de acciones por parte de los gobiernos de la región a las necesidades de los jóvenes, en todos los países, aunque con diferencias significativas entre ellos.

Los gráficos 1 a 6 muestran la distribución de personas según país que consideran que su gobierno apoya y promueve programas y acciones dirigidas a los jóvenes². En los mismos, pueden observarse las diferencias entre los países (diferencias entre los puntos en cada categoría y las brechas dentro de los países al comparar cada categoría con el total país que se encuentra a la izquierda en la primer serie de puntos.

Atendiendo a diferentes atributos de los encuestados, ¿cuáles son los que determinan mayor proporción de aprobación?

En todos los países se observa una menor proporción relativa de jóvenes que de adultos, con una evaluación positiva de las acciones del gobierno en materia de juventud. Esta diferencia etaria resulta especialmente relevante en Chile, Brasil y Uruguay. La menor aceptación por parte de la población potencialmente beneficiaria (jóvenes) de estas políticas gubernamentales debe ser especialmente tomada en cuenta, ya que está hablando o bien de una insuficiencia en su calidad y cobertura, o bien de un problema de difusión y legitimación entre sus destinatarios.

En relación con las demás variables de estratificación consideradas, se observan diferencias en la evaluación positiva de las políticas de juventud en prácticamente todos los países de la región, con arreglo al nivel de escolaridad y el ingreso de las personas (que a su vez sostienen alta asociación entre ellas)³. Así, en Chile, Brasil y Uruguay se registran mayores niveles de conformidad entre quienes alcanzaron la educación superior frente a quienes no culminaron la enseñanza primaria. En Bolivia sucede exactamente lo contrario: los menos educados presentan una mayor proporción de personas que considera que el gobierno desarrolla políticas activas en el área de juventud. Con el ingreso sucede algo similar: en Uruguay y Chile los de mayor renta valoran más positivamente las políticas dirigidas a los jóvenes que los más

² El mismo está calculado sobre el total de respuestas válidas.

³ Los V de Kramer de la asociación entre nivel educativo en 4 tramos y tercil de ingresos varía (con significación plena) entre 0.21 y 0.3 para todos los países

pobres, mientras que en Bolivia son precisamente los de menor renta los que mayor conformidad presentan al respecto⁴.

Si ahora nos ocupamos del área geográfica donde viven los entrevistados, se constata que en Chile, Brasil y Bolivia los habitantes del medio rural tienden a tener una visión más positiva del rol del gobierno que aquellos que viven en la ciudad. Lo contrario sucede en Uruguay: en dicho país, los sectores urbanos consideran que el gobierno apoya y promueve acciones para los jóvenes en una mayor proporción que sus conciudadanos del campo.

Finalmente, el análisis en base al sexo no registra diferencias relevantes para ninguno de los países considerados.

2 Prioridades sectoriales

Una segunda cuestión a analizar refiere a las prioridades que los habitantes de los países considerados asignan a las distintas áreas sectoriales en que pueden dividirse estos programas. El gráfico 7 resume, para cada país la proporción de personas que seleccionaron entre las tres más importantes a cada una de las nueve áreas de políticas juveniles incluidas en el formulario, a saber: 1) transporte gratuito o con descuento, 2) acceso a la tierra para agricultores jóvenes, 3) inclusión educativa, 4) cultura, deporte y espacios públicos, 5) inclusión laboral, 6) apoyo a la inclusión social de jóvenes con antecedentes criminales, 7) políticas de salud para jóvenes, tratamiento de VIH y embarazo adolescente, 8) reducción de daños con drogas, y 9) inclusión de minorías (jóvenes, discapacitados, mujeres, indígenas, negros). Además de los totales por país, los resultados se presentan desagregados por los dos grandes grupos de edad.

En líneas generales, del análisis de los totales por país se desprende que, a juicio de los ciudadanos, las priorizadas son las áreas sociales tradicionales cuya expansión caracterizó a la primera generación del Estado desarrollista. Es así que las áreas de la educación, la salud y el trabajo, ocupan en casi todos los países, los tres primeros lugares en su escala de prioridades; y esta clara jerarquización frente a demandas de nuevo cuño como los derechos humanos, el transporte o la cultura puede interpretarse como una reacción ante el desmantelamiento de los estados sociales que dominó la ola neoliberal de los años 80 y 90. Es que finalizada la primera fase de institucionalización de los estados nacionales, a comienzos del siglo XX las jóvenes naciones latinoamericanas comenzaron (con mayor o menor éxito según el caso, más tarde o más temprano) a abandonar el modelo de Estado típicamente liberal (reducido a las funciones de “juez y gendarme”) dominante durante el siglo XIX. El crecimiento de las capas medias, la urbanización y la fuerte presencia inmigratoria exigieron la generalización de la enseñanza (con el objetivo manifiesto de

⁴ Una posible interpretación del comportamiento de Bolivia en esta variable, -que fuera discutida en el grupo de trabajo-, es que en este país la respuesta sobre las acciones del gobierno a favor de los jóvenes esté “contaminada” por el apoyo en general al gobierno - que sienta sus bases en los sectores de menores ingresos, situación que se agudizaría dada la coyuntura política que se vivía en el país al momento de la encuesta. Esta interpretación no se contradice con el bajo conocimiento y recordación de políticas concretas, que para el caso de Bolivia no supera el 5% en el total de los encuestados, siendo aún menor el porcentaje que conoce o recuerda alguna para el caso del tercil de ingresos más bajos.

formar los ciudadanos), la expansión de los servicios de salud, y una mínima protección del trabajo (frente a una clase obrera de incipiente gestación).

El proceso adquirió decidido impulso en la época de la posguerra, durante el auge del modelo de sustitución de importaciones. Especialmente en el cono sur de América (quizás con la excepción de Paraguay y Bolivia), se desarrolló un incipiente “Estado desarrollista”⁵, que garantizó cierta cobertura de salud, educación gratuita y acceso al empleo para sectores importantes de la población. Fue durante el último cuarto del siglo XX que, primero al amparo de las dictaduras militares y luego bajo el influjo del consenso de Washington, los países del sur de América iniciaron un sostenido proceso de retraining de las funciones sociales tradicionales de este Estado social (privatización de la enseñanza y la salud pública, des-regulación laboral, etc.) Las crisis económicas y sociales acaecidas en los albores del presente siglo marcaron el fin de la era-neoliberal y el ascenso de gobiernos de orientación progresista, con un fuerte énfasis (al menos discursivo) en la recomposición de las demandas generadas durante todo el siglo XX y largamente incumplidas en las últimas décadas.

Por tanto, no debe llamar la atención que precisamente estas áreas sean hoy las que ocupan los primeros lugares en el orden de prioridades ciudadanas: el desarrollo de servicios de atención a la salud (en particular, el embarazo adolescente y los programas de VIH) ocupa el primer lugar en la lista de áreas prioritarias en Paraguay y Uruguay, el segundo lugar en Argentina y Bolivia, y el tercer lugar en Brasil y Chile. La reinscripción de los desafilados del sistema educativo y el combate a la deserción escolar ocupa el primer lugar en Argentina, Chile y Bolivia, y el segundo puesto en Brasil, Paraguay y Uruguay. Finalmente, la inclusión laboral de los jóvenes constituye la primera prioridad para los ciudadanos brasileños, y la tercera prioridad para argentinos, chilenos y uruguayos.

Demandas que podrían definirse como de “segundo orden” (en el sentido de que se tornan relevantes una vez satisfechas las necesidades de salud, trabajo y educación) como el transporte ocupan lugares secundarios. Dentro de este segundo conjunto de demandas, el transporte ocupa un lugar importante (segundo en Chile y tercero en Bolivia y Paraguay). La importancia de las demás áreas resulta marginal en la mayoría de los países: el acceso a la tierra ocupa el último lugar en Brasil, Argentina y Chile; la inclusión de las mal llamadas “minorías” (jóvenes, mujeres, negros, indígenas o discapacitados) es la última prioridad de los uruguayos; el desarrollo de la cultura y los espacios públicos cierra la lista de los paraguayos, y es pequeña la proporción de bolivianos que considera prioritaria la inclusión social de los jóvenes con antecedentes criminales.

⁵ La heterogeneidad de situaciones en América Latina no permitiría englobar a todos los países en el término “Estados de Bienestar”.

Para las temáticas seleccionadas, un análisis de las consideradas prioritarias según edad no muestra, salvo excepciones, brechas sustantivas (de 10 puntos porcentuales o más) que indiquen diferencias importantes en la estructuras de prioridades según edad.

Las acciones gubernamentales orientadas a la *Cultura, deporte y espacios públicos, Inclusión laboral, Inclusión de infractores, Inclusión educativa y mitigar la deserción, y Salud, maternidad y SIDA*, son tan importantes para jóvenes como adultos, con las excepciones de Bolivia en el área de educación (que presenta diferencias marginales de 5 puntos porcentuales a favor de los adultos⁶) y de Uruguay en el área de la salud (que adquiere mayor importancia entre los jóvenes).

En el otro extremo, la temática con mayores diferencias en la estructura de prioridades de jóvenes y adultos en la región es con relación al *Acceso a la tierra* (aspecto posicionado en el 4°, 5° y 6° lugar del ranking en Bolivia, Paraguay y Uruguay respectivamente, y en último lugar del ranking en Argentina, Brasil y Chile). En toda la región este aspecto es más prioritario entre los adultos, y en cuatro de los seis países de la región analizados (Uruguay, Paraguay, Argentina y Bolivia) se presentan brechas significativas de 17, 10, 8 y 6 puntos porcentuales a favor de los adultos. Puede plantearse aquí la hipótesis de que esto esté influenciado según la región de residencia (urbano/rural), y sea un tópico mencionado principalmente por adultos residentes en zonas rurales frente a la migración campo-ciudad que toca fuertemente a las edades más jóvenes ante la falta de opciones y posibilidades de desarrollo personal y laboral en las zonas rurales.

Por último, demandas de segundo orden como la *Inclusión de minorías, Transporte gratuito y Reducción de daños con drogas* son más mencionados como prioritarias por los jóvenes de dos o tres países de la región. Así, los jóvenes argentinos, paraguayos y uruguayos valorizan más que sus mayores las acciones en pro de la *Inclusión de minorías*, mientras lo mismo ocurre en Bolivia y Paraguay frente a la *Reducción de daños por drogas*. El transporte gratuito es más demandado por jóvenes en Argentina y Uruguay, mientras en Paraguay aparece una diferencia marginal a favor de los adultos.

- ***Educación, Salud y Trabajo***

Viendo las tres temáticas más señaladas en función de otras variables de corte, la educación como prioridad, no manifiesta diferencias en ninguno de los países en función del sexo de los entrevistados. Sólo en Uruguay, Brasil y Chile (en ese orden) el ingreso del hogar y el nivel educativo de los entrevistados muestra diferencias; y estas son a favor de los más ricos y más educados. Las diferencias en Uruguay son en las dos variables más del doble que la presentada por Chile. El sector (urbano-rural) hace diferencias en Brasil y en Uruguay, siendo un 8% mayor en ambos casos el porcentaje de los que optan por esta temática en el sector urbano que en el rural. En el resto de los países no hace diferencia.

⁶ El 49% de los adultos la mencionan entre las tres acciones más importantes, frente a un 44% de los jóvenes bolivianos.

Se aprecia que acciones vinculadas a **la salud** de los jóvenes tiene un señalamiento mayor entre las mujeres que entre los hombres salvo en Bolivia y Brasil, donde las diferencias no superan los 5 puntos porcentuales. El nivel educativo presenta diferencias porcentuales pronunciadas atendiendo al nivel superior frente a aquellos que sólo alcanzan hasta primaria incompleta. Superan los 11 puntos porcentuales de diferencia en todos los países salvo en Brasil y Chile. El ingreso de los hogares es una variable que revela diferencias porcentuales entre los del tercil más alto frente a los del tercil inferior que superan los 10 puntos en Argentina y Bolivia. La región, considerada como “urbano” y “rural” también marca diferencias en cuanto a la priorización de la temática salud de los jóvenes. En los sectores urbanos la proporción es mayor que en el rural en todos los países salvo Brasil y Chile en que no se aprecian diferencias. En Argentina y Uruguay estas diferencias se sitúan entre 12 y 13 puntos porcentuales a favor del sector urbano y en Bolivia y Paraguay en el 8% en el mismo sentido.

El sexo no marca diferencias sustantivas entre aquellos que priorizan (entre los tres primeros lugares) al **trabajo** de los jóvenes como un área que requiere actuación de los gobiernos. Tampoco logra distancias el ingreso de los hogares de los entrevistados. En cambio si se muestran algunas diferencias entre los que tienen nivel superior y los que no alcanzan a completar el nivel primario de educación en Argentina y Chile a favor de los más educados. En cambio en Uruguay (que presenta la diferencia porcentual de mayor valor absoluto) lo hace en sentido inverso: se registra mayor proporción de los que optan por priorizar el trabajo de los jóvenes entre los que tienen menor nivel educativo. En cuanto al sector (urbano-rural) se detecta nuevamente que Uruguay representa un caso atípico: si las diferencias están en el orden de 7% a favor del sector urbano en el tema trabajo de los jóvenes, para Uruguay es el sector rural en donde se responde en mayor proporción (una diferencia de 11 puntos porcentuales).

Por tanto, del análisis de éstas tres temáticas se desprende que frente a las demandas de protección social al Estado de corte más tradicional (educación, salud y trabajo), en este caso focalizada en los jóvenes, sólo las acciones relativas a la *salud* son sensibles al **sexo** de los entrevistados, siendo las mujeres las que priorizan más que los hombres esta área (salvo en Brasil y Bolivia en que las diferencias son menores a 5 puntos).

El **ingreso** de los hogares de los entrevistados no muestra (al compararse el primer y el último tercil) diferencias en la priorización del área *trabajo*. Si lo hace en cuando a *educación* en tres países (Uruguay, Brasil y Chile en ese orden) a favor de los más ricos. En relación a *salud*, el ingreso muestra diferencias sólo en Argentina y Bolivia, siendo priorizado más frecuentemente en el tercil más rico en relación al más pobre.

El **nivel educativo** marca diferencias a favor de los más educados frente a los menos en la temática de *trabajo* en Argentina y Chile, y en sentido contrario (priorizan más este área los menos educados) en Uruguay. También lo hace en el área *educación* en Brasil, Chile y Uruguay (en sentido positivo) y en el área *salud* (en Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia; en ese orden y en sentido positivo).

En cuanto al **área geográfica**, ésta señala diferencias en la priorización del *trabajo* para jóvenes en Bolivia, Chile y Argentina siendo señalado en mayor medida dentro del sector urbano. En un sentido contrario, en Uruguay es mayor la proporción del sector rural que prioriza el trabajo entre las tres acciones gubernamentales más importantes dirigidas a jóvenes. Atendiendo a la *salud*, es un área que se prioriza más en el sector urbano que en el rural en todos los países salvo Chile y Brasil en que no se aprecian diferencias. En cuando a la educación como línea de acción del gobierno para los jóvenes hay diferencias a favor del sector urbano sólo en Uruguay y Brasil

A modo de síntesis

En primer lugar, en general en todos los países involucrados en este estudio las prioridades temáticas en materia de políticas para jóvenes por parte de la ciudadanía responden a preocupaciones modernas (educación, trabajo, salud)⁷. Un segundo grupo de temas, constituido por transporte gratuito o con descuento, reconocimiento e inclusión de “minorías”, la reducción de daños con drogas, ocupan puestos secundarios, destacándose “transporte gratuito” en Paraguay, Bolivia, como la tercer temática prioritaria, mientras en Chile comparte el segundo lugar junto con salud y trabajo.

Independientemente de cómo fueron posicionados en el ranking, las cuestiones más priorizadas entre los jóvenes (frente a la importancia dada por los adultos) son diversas en la región según país: Transporte gratuito en Argentina, Reducción de daños con drogas en Bolivia, Cultura y deportes en Brasil –aunque con una diferencia leve-, inclusión laboral en Chile –también con leve diferencia-, inclusión de minorías y reducción de daños con drogas en Paraguay, y salud maternidad y SIDA, inclusión de minorías y transporte gratuito o con descuento en Uruguay.

En segundo lugar, los niveles de conocimiento de políticas sectoriales dirigidas a los jóvenes son bajos o nulos según país, destacándose Uruguay y Brasil respectivamente con las mayores recordaciones (que en todo caso alcanzan apenas a 1 de cada 5 ciudadanos), seguidos de Chile donde 1 de cada 7 de sus ciudadanos menciona al menos una política. En Argentina, Bolivia y Paraguay los niveles de recordación son prácticamente inexistentes (entre 7% y 3%).

De los tres países con recordación leve o moderada, un análisis de la recordación según la edad muestra que ésta sólo hace diferencia en Brasil, donde son los jóvenes quienes recuerdan en mayor medida alguna política dirigida a ellos. A su vez, la recordación es diferencial por nivel educativo e ingreso en los tres casos, mientras es en las zonas urbanas brasileñas y uruguayas donde las políticas sectoriales de este tipo se recuerdan mayormente.

⁷ Otra preocupación moderna como es el acceso a la tierra, es mencionada como prioridad por 2 de cada 10 argentinos, brasileños y chilenos, y por poco más de 3 de cada 10 bolivianos, paraguayos y uruguayos (ocupando el cuarto puesto en los dos primeros países y el quinto en el tercero).

En tercer lugar, no sólo debe notarse el bajo o muy bajo conocimiento (medido a través de recordación) de proyectos o programas de los gobiernos dirigidos a los jóvenes de cada país sino que se visualiza dificultad para diferenciarlos de otras áreas, en particular infancia y apoyo a familias de bajos recursos. Esto ocurre en todos los países. También opera una confusión en la órbita institucional desde la que las acciones se implementan. El análisis cualitativo de las menciones muestra cómo éstas van desde políticas estrictamente diseñadas e implementadas desde el Estado, políticas o acciones con financiamiento o intervención parcial del Estado, y acciones o emprendimientos ajenos al gobierno.

Por otra parte, en toda la región las temáticas de las políticas o acciones más mencionadas hacen referencia a las siguientes áreas: trabajo, educación, cultura; deportes, y drogas (este último caso en Uruguay y Brasil)

En cuarto lugar, independientemente del accionar concreto en cada país, la evaluación ciudadana de los gobiernos en su preocupación y compromiso con la atención de las necesidades de estos sectores de la población muestra:

- Bajos niveles de aceptación a nivel regional (por debajo del 50% en todos los países).
- Altas heterogeneidades en los niveles de aceptación según país.
- Opiniones diferenciales entre los distintos países según edad (Brasil, Chile y Uruguay), nivel educativo e ingreso (Bolivia y Uruguay), y región (Bolivia, Brasil, Chile y Uruguay), aunque con distintos sentidos.

En efecto, en todos los países se encuentra que la mayoría de ciudadanos considera que su gobierno no hace lo necesario para responder a las necesidades de los jóvenes: en todos los casos más de la mitad de los ciudadanos considera que el gobierno no conoce ni se preocupa por las necesidades de los jóvenes o, en su defecto, las conoce pero no hace nada al respecto. No obstante, la percepción sobre la preocupación y acción gubernamental varía sustantivamente según país, encontrándose en los extremos a Paraguay y Uruguay con diferencias de casi 40 puntos porcentuales en los niveles de acuerdo con una acción gubernamental preocupada y activa en las políticas hacia los jóvenes. De hecho pueden reconocerse tres grupos de países según los niveles de acuerdo con que el gobierno apoye y promueva programas y acciones dirigidas a la juventud. En un extremo se encuentra Uruguay como el país que recibe la mejor evaluación de las políticas de juventud por parte de los ciudadanos (43%). A él le siguen un grupo de países con niveles de evaluación positiva en el entorno del 20%: Bolivia, Brasil y Chile (con evaluaciones del 26%, 20% y 18% respectivamente). En el extremo inferior se encuentran Argentina y Paraguay, como los países con peor evaluación de la acción gubernamental en esta materia (sólo el 8% y 7% de aprobación respectivamente).

Debiera considerarse entre las tareas de los gobiernos de todos los países aquí analizados el realizar un esfuerzo en el desarrollo de políticas, revisión de las mismas o bien de legitimación de las existentes, si es

que éstos se plantean como objetivo desarrollar redes de protección de los jóvenes cuya importancia cuente con el reconocimiento y la aceptación de la población.

Con respecto a las diferencias según los atributos de los encuestados relativas a la aceptación se encuentra en Brasil, Chile y Uruguay, mayor aceptación de las políticas por parte de los jóvenes. A su vez, la aceptación según el nivel educativo y el ingreso de los hogares actúan con sentido diferente en los países estudiados. Si para Uruguay a mayor nivel educativo y a mayor ingreso mayor aceptación de las políticas para los jóvenes, en Bolivia son los menos educados y los de menor renta los que en mayor medida aprueban la gestión gubernamental en esta área. En Chile la aprobación varía según nivel educativo pero con un comportamiento heterogéneo. En las zonas rurales bolivianas, brasileñas y chilenas hay mayor aprobación, mientras en el caso uruguayo son las zonas urbanas quienes aprueban mayormente. En ningún caso se presentan diferencias según sexo.

La encuesta enfoca en la percepción de la ciudadanía sobre la actuación del gobierno de cada país específicamente en las acciones enfocadas a los jóvenes. Es difícil evaluar si en algún caso (y si ocurriera con qué intensidad) la respuesta estuviera mediada por la aceptación al gobierno nacional en general. Por otra parte, las políticas sobre las que focaliza este trabajo son las que explícitamente se dirigen a jóvenes. Sin embargo, pueden existir casos que sin hacer foco sectorial en los jóvenes, los tengan como beneficiarios y/o protagonistas.

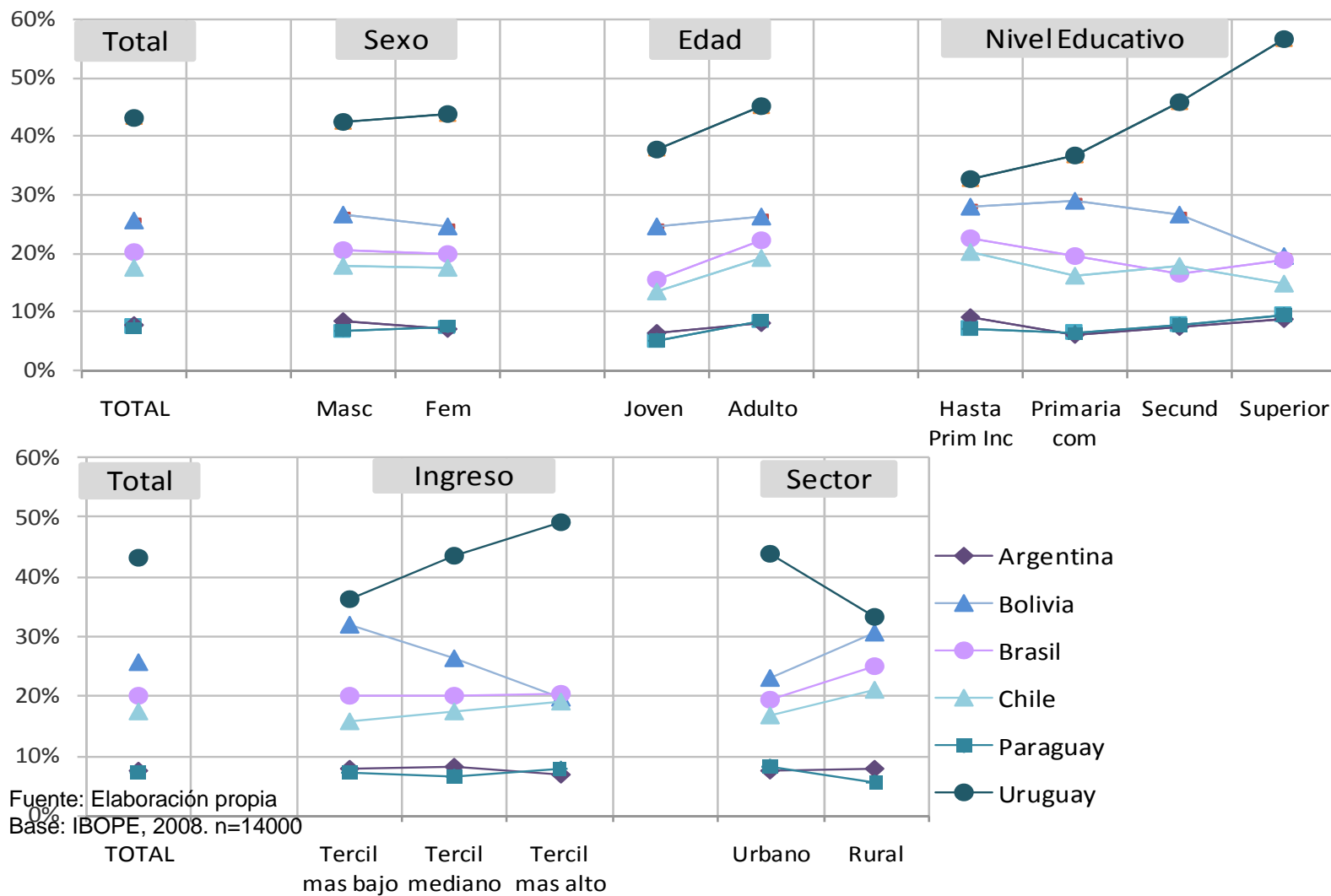
Puestos en la situación hipotética de ser presidentes y tomar medidas a favor de los jóvenes de su país, los entrevistados de toda la región priorizan educación y trabajo. El 50% o más de los entrevistados de todos los países, sin distinción de edad y sexo, sostiene los dos pilares tradicionales de integración social (educación y trabajo) como las cuestiones centrales para los jóvenes actualmente. Brasil se diferencia del conjunto en una distribución casi en quintos en las acciones preferentes: educación de calidad (25%) trabajo (18%), salud pública especializada para jóvenes (18%), seguridad frente a los derechos humanos (16%), y cuidado del medio ambiente (16%). El resto (6%) opta por transporte público y gratuito para jóvenes.

Tabla 1: Porcentaje de personas por país que responden : “Hoy en día el gobierno de (mi país)...”^[1]

	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay
No conoce ni se preocupa de las necesidades de los/as jóvenes	17%	24%	10%	18%	13%	8%
Conoce las necesidades de los/as jóvenes pero no hace nada	74%	46%	69%	64%	79%	45%
Apoya y promueve programas y acciones dirigidas para la juventud	8%	26%	20%	18%	7%	43%
Ninguna de ellas	2%	5%	1%	1%	1%	3%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

^[1] Sobre respuestas válidas (excluye sin dato y no contesta)

Gráficos 1 a 6: Hoy en día, diría que el gobierno de (país): % apoya y promueve programas y acciones dirigidas para la juventud



**Tabla 2: Porcentaje de personas por país que afirman:
“Hoy en día el gobierno de (mi país) apoya y promueve programas y acciones
dirigidas a la juventud”^[1]**

		Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay
TOTAL		8%	26%	20%	18%	7%	43%
SEXO	Masculino	8%	27%	21%	18%	7%	42%
	Femenino	7%	25%	20%	17%	8%	44%
EDAD	Joven	7%	25%	16%	13%	5%	38%
	Adulto	8%	26%	22%	19%	9%	45%
NIVEL EDUCATIVO	Hasta Primaria Inc	9%	28%	22%	20%	7%	33%
	Primaria completa	6%	29%	20%	16%	6%	37%
	Secundaria	7%	27%	17%	18%	8%	46%
	Superior	9%	19%	19%	15%	9%	57%
INGRESO	Tercil mais baixo	8%	32%	20%	16%	7%	36%
	Tercil mediano	8%	26%	20%	17%	7%	44%
	Tercil mais alto	7%	20%	20%	19%	8%	49%
SECTOR	Urbano	8%	23%	19%	17%	8%	44%
	Rural	8%	31%	25%	21%	6%	33%

^[1] Sobre respuestas válidas (excluye sin dato y no contesta)

Gráfico 7: Ranking de importancia de áreas de acción y proyectos de gobierno dirigidas a los jóvenes (entre los tres más importantes)

